

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá D.C, catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

REFERENCIA	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN	Nº. 2022-00668
ACCIONANTE	MARCELA YERALDI OLIVAR GUTIÉRREZ
ACCIONADO	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV
DECISIÓN	NIEGA AMPARO CONSTITUCIONAL

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela instaurada por la señora **MARCELA YERALDI OLIVAR GUTIÉRREZ**, en contra del **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV**.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO:

La señora **MARCELA YERALDI OLIVAR GUTIÉRREZ** interpuso acción de tutela por considerar vulnerado el derecho de petición, con fundamento en los siguientes:

HECHOS (SÍNTESIS):

- 1.- Indicó que su señor padre **JORGE LUIS OLIVAR TOLOZA** en el año 1992 fue víctima del conflicto armado y que por producto de una mina antipersonal en el corregimiento de San Vicente perdió su pierna izquierda, hecho que le permitía según el Decreto 1290 de 2008 acceder a una indemnización por ser víctima de lesiones personales con discapacidad permanente la suma de \$18.170.520, no obstante, solo le fue reconocida la suma de \$4.350.000., valor que considera no está acorde a la ley dado que la ley de reparación de victimas establece que el monto a reconocer por hechos victimizantes equivalen a 40 SMLMV.
- 2.- Manifestó que en su condición de hija única de la víctima y de acuerdo con la Ley 387 de 1997 y el Decreto 1290 de 2008, le asiste derecho a la reparación económica en igualdad de circunstancias, por lo que consideró que la entidad accionada debió indemnizarla al mismo tiempo que su padre y por la suma de \$18.170.520 m/cte.
- 3.- Señaló que, en busca de respuestas, el 30 de julio del año en curso, presentó ante la entidad accionada, escrito de petición, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna.
- 4.- Expresó que tal como lo ha determinado la Corte Constitucional, es sujeto especial de protección constitucional considerando que la población desplazada es extremadamente vulnerable.

PRETENSIONES:

Por lo tanto, acude la accionante al aparato judicial para que se le tutelen los derechos fundamentales vulnerados, ordenando a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV** contestar de fondo la solicitud efectuada.

REGLAS DE COMPETENCIA:

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

ADMISIÓN Y LITIS:

La presente acción de tutela fue admitida mediante auto de fecha calendado seis (6) de septiembre de dos mil veintidós (2022) y se ordenó notificar a la parte accionada para que ejerciera su derecho de defensa. (Archivo N° 011)

Fenecido el término concedido, la accionada dio contestación adjuntando la respuesta dada al accionante. (Archivo N° 014)

LEGITIMACIÓN ACTIVA:

La parte actora se encuentra legitimada como persona natural del derecho fundamental invocado, teniendo en cuenta que solo se necesita la condición de persona titular del derecho fundamental, cuyo amparo invoca.

LEGITIMACIÓN PASIVA:

La presente acción se encuentra dirigida en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV, por ser la entidad que sería responsable por la acción u omisión vulneradora del derecho objeto de la presente tutela, se encuentra legitimado el extremo pasivo.

CONSIDERACIONES:

PROBLEMA JURÍDICO:

*Corresponde al Juez de tutela, determinar si a la señora **MARCELA YERALDI OLIVAR GUTIÉRREZ** se le está vulnerando su derecho de petición, debido proceso y dignidad, al no dar respuesta principalmente a la solicitud por ella elevada.*

IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOLUCRADO:

DERECHO PRESUNTAMENTE VULNERADO:

Señala la accionante como conculcado principalmente el derecho de petición. La Carta Política, lo plasma en su art. 23 como uno de los derechos constitucionales fundamentales que les asiste a las personas a fin de obtener una pronta resolución a las peticiones que de manera respetuosa se hayan elevado a cualquier entidad pública e incluso particular.

El derecho de petición, visto desde la órbita del estado social de derecho, es ante todo un garantizador de la puesta en marcha de la democracia participativa, estableciendo una efectiva relación persona - Estado, cobijando así muchos otros derechos consagrados como constitucionales como el derecho a la información y a la participación política de los coasociados.

El núcleo esencial del derecho de petición está constituido por la pronta resolución, pues de nada serviría que el ciudadano tuviera la posibilidad de dirigirse a la autoridad si no recibe de ésta una respuesta que resuelva la solicitud elevada.

La respuesta debe ser oportuna, resolverse de fondo de manera clara, precisa y en congruencia con lo solicitado y debe también ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

*A su vez, indica la accionante, como vulnerado el derecho al **debido proceso**, consagrado en el art. 29 de nuestra carta magna, en donde se indica que: "(...) el debido proceso, se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es un derecho fundamental de toda persona nacional o extranjera, natural o jurídica. En esta medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo*

y particular exigible por una persona y es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia”.

El caso en concreto:

Así las cosas, procede esta Juez Constitucional al estudio en sede de tutela, indicando que la accionante invoca como derecho conculcado el de la dignidad, debido proceso y petición, supuestamente vulnerados por la entidad accionada.

Con el escrito de tutela se allegó la misiva dirigida a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por medio del cual la accionante solicitó: i) se le incluya en el registro único como víctima, ii) adelantar todas las acciones necesarias para esclarecer su denuncia y, iii) las razones por las cuales a su padre solo le concedieron el 10% del total de los recursos que a bien le corresponden.

Se reportó en la petición como dirección para recibir notificaciones el correo electrónico marcelaolivar1992@gmail.com. La radicación ante la accionada se probó por la actora con la evidencia de envío de la petición el 30 de julio 2022 al correo electrónico servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co. (Archivo N° 02 y 08).

La UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, indicó que la solicitud elevada por la ciudadana fue contestada en debida forma a través del radicado código N° 6915749 del 8 de septiembre de 2022, adjuntando prueba de ello. (Pág. 9. archivo N° 014)

Así las cosas, se encuentra que la respuesta emitida por la referida accionada con posterioridad a la admisión de la acción de tutela, cumple con los caracteres de claridad y congruencia, en la medida que en la respuesta se indicó las razones por las cuales no es posible incluirla en el Registro Único de Víctimas – RUV, el trámite que debe agotar para la inscripción en el registro y así poder acceder a las medidas de atención, asistencia, reparación y garantías como víctima de desplazamiento forzado y la reserva legal que goza el expediente de su progenitor JORGE LUIS OLIVAR TOLOZA, para lo cual se le solicitó autorización o poder para poder brindar la información solicitada.

Ahora bien, según consta en la página 7-8 del archivo N° 014, se observa que la respuesta fue debidamente notificada a la accionante a su correo electrónico reportado para recibo de notificaciones marcelaolivar1992@gmail.com.

Por otro lado, frente al reclamo de la accionante del reconocimiento de indemnización al que le corresponde por ser víctima del desplazamiento forzado, mal podría advertir este Despacho que se vulneró su derecho al debido proceso y que en razón de ello la accionada debe conceder tal pedimento, cuando es la accionante quien no ha agotado el trámite establecido, pues como bien lo indicó la accionada, la actora no ha presentado la declaración ante el Ministerio Público, hecho que impide valorar si la señora MARCELA YERALDI OLIVAR GUTIÉRREZ ha sido víctima del desplazamiento forzado.

En este sentido, no se vislumbra que la accionante haya agotado todos los trámites previos existentes para su inscripción en el RUV y, en consecuencia, poder reclamar las medidas de protección y/o indemnización, no siendo admisible que se haga uso de la acción de tutela como vía preferente, para omitir llevar a cabo el trámite que rige para el otorgamiento de la reparación reclamada.

Ahora bien, dentro del plenario la actora no demostró su calidad de víctima de desplazamiento forzado, así como, no alegó la existencia de un perjuicio irremediable, por lo que no hay lugar a ordenar a la entidad accionada que proceda con el registro de la solicitante en el RUV y le conceda las garantías correspondientes, atendiendo al carácter residual y subsidiario de la acción de tutela.

No obstante, acreditado como se indicó que el derecho de petición fue resuelto en debida forma, resulta diáfano que nos encontramos ante un hecho superado, luego este instrumento constitucional de defensa ha perdido su objetivo y en consecuencia resultaría ineficaz, en razón a que el motivo de reclamación ha sido resuelto y no habría lugar a ordenar la ejecución de un hecho que ya se sucedió, pues la orden que pudiera impartir el Juez de tutela no tendría ningún efecto en cuanto a la efectividad del derecho presuntamente vulnerado.

En virtud de lo discurrido, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del derecho que se aduce.

En conclusión, la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser.

POR MÉRITO DE TODAS LAS CONSIDERACIONES PLASMADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO, ESTE JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la accionante **MARCELA YERALDI OLIVAR GUTIÉRREZ**, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

SANDRA MEJÍA MEJÍA
JUEZ

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

El anterior auto se notificó por estado No. 97

Hoy 15 de septiembre de 2022

CAROLINA SANTAMARIA LUNA
Secretaria

Firmado Por:
Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e755b6a6b6abb2cd4bfe6cc58c781a4733dc9574391632ea2d28c5655de1fd06**

Documento generado en 14/09/2022 05:10:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>